

Reforma al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Argentino

The Argentinean Integrated Pensions and Retirement System Reform

Dr. Antonio Sales

Argentino. Abogado-Coordinador de Análisis Legislativo. Gerencia Previsional ANSES de la Argentina. Profesor de Cursos de Posgrado de Seguridad Social y Riesgos del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Argentinean. Lawyer – Coordinator of Legislative Analysis. Welfare Management at ANSES, Argentina. Professor of Postgraduate courses in Social Security and Working Risks at the Pontificia Universidad Católica Argentina.

El presente informe tiene como objetivo principal, explicar los fines de la reforma del año 2007 al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; para ello, previamente, se hará una breve alusión a los derechos sociales que contiene la Constitución y la interpretación que hace el Supremo Tribunal de la Argentina de su alcance y contenido en el periodo previo a la incorporación del artículo 14 bis; luego, se efectuará una síntesis de la evolución histórica de las prestaciones previsionales en la legislación argentina.

La Constitución Nacional como fuente del derecho previsional

Los derechos previsionales tienen una raigambre constitucional que siempre fue puesta de resalto por la Corte

This report is aimed at explaining the purpose of the Integrated Pensions and Retirement System Reform of 2007. To that effect, it includes a brief review of social rights recognized in the Constitution and the interpretation by the Supreme Court of Argentina on their scope and content before the addition of article 14 bis; followed by an overview of the historic evolution of welfare benefits in Argentinean legislation.

The National Constitution as a source of Social Security Law

Social security rights take root in the Constitution, as stressed by the Supreme Court of Justice of Argentina

Suprema de Justicia de la Nación Argentina desde su creación como Tribunal Supremo, en sus fallos dictados en las causas vinculadas con el derecho a la percepción de jubilaciones y pensiones, en favor de los trabajadores y sus causahabientes. Por otra parte, la Corte Suprema ha reconocido estos derechos basados en la solidaridad social y en el principio que dimana del Preámbulo de nuestra Constitución cuando dice “promover el bienestar general”, también antes de la existencia de la Constitución de 1949¹ y luego de la anulación de la misma en 1955, hasta la sanción del art. 14 bis. Al respecto, citaré algunos fallos de dicha época:

“El monto de una pensión no puede reputarse un bien definitivamente incorporado al patrimonio del beneficiario, sino que, por el carácter de orden público que tienen las leyes sobre la materia, puede ser modificado en adelante... Si bien la jubilación o pensión constituye en sí un verdadero derecho previsional del cual no puede ser privado el beneficiario sino por causas sobrevivientes previstas en la ley ni modificado su monto arbitrariamente...”. (CSJN Fallo 27/12/1937 La Ley t.9. p. 304 y sigs.).

“La jubilación por invalidez otorgada de acuerdo a las disposiciones de la Ley 11.110 debe ser abonada íntegramente por la Caja creada por la misma, aunque se le hayan computado al recurrente los servicios prestados bajo otros regímenes jubilatorios...”. (CSJN Fallo 25/04/1932 J.A. t.37, p. 1184).

Si leemos el art. 14 bis de la Constitución Nacional sancionada en la Convención Constituyente del año 1957, encontramos semejanzas notables con el reconocimiento de los derechos sociales expuestos en diversos documentos de la Organización Internacional del Trabajo.

La Constitución Nacional constituye la primera fuente obligada de la Previsión Social. Consagra en el párrafo 3° del artículo 14 bis un derecho individual, fundamental para nuestra materia: “... El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica,

in sentences related to the entitlement of workers to pensions and retirement benefits, since its establishment as a High Court. On the other hand, the Supreme Court has recognized these rights based on social solidarity and in the Constitutional Principle of “promoting the well-being”, before the existence of the Constitution of 1949¹ and after its annulment in 1955, up until the amendment of article 14 bis. To that effect, some of the sentences at that time are quoted as follows:

“The amount of a pension cannot be recognized as a good definitely incorporated to the beneficiary’s assets. Because if the public nature of laws on this subject, it can be modified in the future... While retirement benefits and pensions are themselves true social security rights of which a beneficiary cannot be deprived for causes other than those provisions established by law, nor can the amount be arbitrarily modified...” (Supreme Court of Justice sentence 27/12/1937 La Ley t.9. p. 304 y sigs.).

“Disability retirement pensions granted in accordance to provisions sated in Law 11.110 must be covered completely by the trustees fund created by this law, even when services provided by the beneficiary under other retirement schemes have been merged (Supreme Court of Justice sentence 25/04/1932 J.A. t.37, p. 1184).

When carefully reading article 14 bis of the National Constitution, adopted in the Constitutional Convention of 1957, several similarities can be found in terms of the recognition of social rights, as contained in different documents prepared by the International Labour Organization.

The National Constitution is the primary source regarding social security. In paragraph 3, article 14 bis recognizes an individual right which is fundamental in our field of study: “... the State shall provide the benefits which comprise social security, which shall be integral and inalienable. In particular, the law shall establish mandatory social insurance, which national or provincial entities with financial and eco-

¹ La Constitución de 1949 sancionada durante la primera presidencia del General Juan Domingo Perón (1946-1952), incorporó a la parte dogmática los derechos sociales y económicos llamados “derechos especiales”, como los derechos del trabajador (al empleo, a gozar de una retribución justa, a la capacitación, a la preservación de la salud, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales), de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura.

¹ The Constitution of 1949, adopted during the first administration of Juan Domingo Peron (1946-1952), incorporated into its dogmatic section social and economic rights, entitled “special rights”, such as labor rights (the right to work, to enjoy fair compensation, to training, to the preservation of one’s health, to the protection of one’s family, to economic improvement, and to the defense of professional interests), family rights, elderly rights, as well as the right to education and culture.

administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna...².

Una interpretación de ese artículo, nos conduce a afirmar que la Constitución Nacional consagra un Derecho a la Seguridad Social, integral e irrenunciable para todos los habitantes, asumiendo el Estado la obligación de brindar las prestaciones que lo hagan efectivo y, por otra parte, previendo como un programa a cumplir por medio de la ley, la atención las contingencias de la vejez; invalidez; muerte; cargas de familia; y vivienda digna para sus habitantes.

Por otra parte, la reforma constitucional del año 1994 incorporó una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos en su nuevo artículo 75 inciso 22, de contenido sustancial en materia de derechos y garantías de la Previsión y Seguridad Social.

Algunos de estos tratados internacionales ya integraban el Derecho Interno Argentino, mediante la ratificación legislativa. Sin embargo, es a partir de la reforma constitucional de 1994, que se les confiere jerarquía constitucional.

Además, tanto el inciso del artículo citado como el inciso 24 del mismo, han dejado abierta la posibilidad para incorporar -en el futuro- acuerdos de esa índole, a cuyo efecto, se dejó establecida la metodología pertinente.

Sólo para citar algunos instrumentos referidos, mencionaremos la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto de San José de Costa Rica; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social... habida cuenta de la organización y recursos de cada Estado...”.

En análogo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) dispone: “...los Estados partes se comprometen a adop-

tionomic autonomy will be in charge of, administered by those involved with participation of the State, without allowing for the superposition of contributions; retirement benefits and mobile pensions; integral protection of the family; defense of the family’s well-being; family economic compensation and access to adequate housing...².

By interpreting that article, it can be stated that the National Constitution recognized the right to social security as integral and inalienable for all, where in the State is charged with providing benefits to make this right effective and, on the other hand, supplying a program which must be complied with by law, in order to tend to contingencies resulting from old age, disability, death, family obligations, and adequate housing for all.

On the other hand, the Constitutional Reform of 1994 incorporated a series of international human rights treaties into article 75, subsection 22, substantial in terms of social security rights and entitlements.

Some of these instruments had already become a part of Argentinean Domestic Law, through the process of ratification. However, it is by means of the Constitutional Reform of 1994 that they are awarded constitutional hierarchy.

Additionally, both subsection 22 and subsection 24 of said article have opened the possibility to incorporate -in the future- supplementary agreements of this kind, for which the process was intentionally included.

A few of these instruments are: the Universal Declaration of Human Rights, the American Convention on Human Rights, and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

The Universal Declaration states that “everyone, as a member of society, has the right to social security in accordance with the organization and resources of each State...”.

Similarly, the American Convention lays down that “...the States Parties undertake to adopt measures... to achieving progressively... the full realiza-

² El gobierno surgido del movimiento cívico-militar llamado “Revolución Libertadora” del año 1955, que derrocó al Presidente Perón, emitió una proclama por la que declaraba la vigencia de la Constitución de 1853, al tiempo que difundía un decreto llamando a elegir convencionales constituyentes para su reforma. Convocada la Convención, esta sesionó desde agosto a noviembre de 1957 e incorporó a la Constitución el art. 14 bis, en el que se anuncian los derechos del trabajador, los gremios y la seguridad social.

² The government established as a result of the civic-military movement known as the “Liberating Revolution” of 1955, which overthrew President Peron, declared the Constitution of 1853 in force, while calling by decree for constituent elections for its reform. The Constituent Convention took place August through November 1957 and incorporated article 14 bis to the Constitution, which recognized the rights of workers, unions, as well as, the right to social security.

tar providencias... para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación... en la medida de los recursos disponibles..." (art. 26).

La reforma constitucional del año 1994 atribuyó jerarquía constitucional y reconoció como complementarios a los derechos y garantías reconocidos en la primera parte de la Carta Magna, a todos los derechos consagrados en los tratados internacionales enumerados en el referido artículo, toda vez que éstos "no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos".

Evolución histórica de las prestaciones previsionales en la legislación argentina

La evolución de la protección que otorga las prestaciones previsionales dinerarias en la República Argentina podemos analizarla a la luz de las leyes dictadas en el periodo de organización institucional (desde la sanción de la Constitución Nacional hasta la revolución cívico militar del año 1930 que derrocó al gobierno del Presidente Yrigoyen³), en el periodo de crisis institucional y de los cambios sociales (1930 a 1955), de las revoluciones cívico-militares (1955 a 1983) y de la época actual de consolidación democrática y social (1983-2007). Bajo este objetivo se mencionaron las notas esenciales de cada periodo.

Periodo de organización institucional (1853–1930)

Periodo de gran expansión económica. En 1880, Argentina era un país que iniciaba su plena inserción en el mercado internacional como proveedor de materias primas y productos alimenticios de origen agropecuario. Hacia el fin de la etapa, en 1929, se había convertido ya en uno de

³ Presidente argentino, fundador del Partido Unión Cívica Radical, junto con su tío Leandro N. Alem, gobernó en dos periodos alternados (1916-1922 y 1928-1930). Participó en diversos intentos de derrocamiento del gobierno en la década de 1890. Democratizó la vida pública y realizó reformas sociales y universitarias. Fue derrocado por un golpe de estado encabezado por el ejército a cargo del General José Félix Uriburu, apoyado fuertemente por los sectores liberales y de derecha y también desde el exterior por Inglaterra que en aquella época poseía en Argentina, importantes empresas frigoríficas, agrícolas, comerciales y de transporte ferroviario.

tion of the rights implicit in the economic, social, educational... standards [in accordance with available resources]" (art. 26).

The Constitutional Reform of 1994 granted Constitutional hierarchy to all rights recognized in international the international treaties listed in the aforementioned article, acknowledging them as complementary to those rights and entitlements included in the first section of the charter, stating these "do not revoke any of the articles contained in the first section of this Constitution and must be considered complementary to the rights and entitlements acknowledged by it".

Historic evolution of social security benefits in Argentinean legislation

The evolution of the protection provided by monetary social security benefits in the Argentinean Republic may be analyzed in light of laws adopted during the institutional organization period (from the enactment of the National Constitution to the civic-military revolution that overthrew President Yrigoyen in 1930³), the institutional crisis and social change period (1930–1955), the civic-military revolutions period (1955 – 1983), and finally within the context of the current age of democratic and social consolidation (1983 – 2007). To that effect, the main characteristics of each era shall be addressed as follows.

Institutional organization period (1853-1930)

A period of great economic development, during the 1880's Argentina has just begun its insertion into the international market as a supplier of raw materials and agricultural food products. Towards the end of this stage, in 1929, the country had become on of the

³ Argentinean President, founder of the Partido Union Civica Radical (Civic Radical Union Party) along his uncle, Leandro N. Alem, who governed for two non-consecutive periods (1916-1922, 1928-1930). Having participated in several failed coups during the 1890's, he eventually introduced democracy into public life and undertook social and university reforms. He was finally overthrown by the army, led by General Jose Felix Uriburu and strongly supported by liberal and right-wing sectors, and backed up overseas by England, who at the time had important refrigerating, agricultural, trade and railroad investments in Argentina.

los grandes exportadores mundiales de carnes y cereales, al tiempo que aparecía un sector industrial aunque no de modo predominante, que aportaba 15% de la producción nacional.

En ese contexto existía una discusión sobre el rol del Estado para gestionar los servicios públicos, incluyendo la concesión de pensiones; algunos afirmaban que debían estar a cargo de empresas privadas y otros defendían la gestión estatal de ciertos rubros esenciales para el desenvolvimiento del país. Al respecto, Julio Argentino Roca, en carta a Agustín de Vedia en 1887, afirmaba “A estar a la teoría de que los gobiernos no saben administrar llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la aduana, al correo, al telégrafo, a los puertos, a las oficinas de rentas, al Ejército y a todo lo que constituye el ejercicio y los deberes del Poder”⁴.

Durante el último periodo presidencial del General Roca, se elaboró el proyecto de régimen de jubilaciones y pensiones para empleados públicos, el cual fue sancionando en 1904 como ley 4349, la cual reconocía en su artículo 31 una *jubilación ordinaria privilegiada* con 25 años de servicios y 50 años de edad para los agentes de seguridad e investigación de la policía terrestre y marítima, choferes de policía, jefes, oficiales y tropa del cuerpo de bomberos, personal de cárceles, de policía aduanera de vigilancia y seguridad, maestros de instrucción primaria al frente de grado, empleados de leproserías, servicio de radiología, hospitales neuropsiquiátricos, salas de enfermedades infectocontagiosas o lugares insalubres de acuerdo con el juicio de la Dirección Nacional de Salud Pública.

Los empleados que cumplían 25 años de servicios y no alcanzaban la edad prescripta de 50 años, podían obtener su jubilación ordinaria privilegiada, sufriendo un descuento de 5% de su haber jubilatorio, por cada año que le faltara para los 50 años.

La *jubilación por retiro voluntario*, era acordada por la Caja a los afiliados que hayan prestado 20 años de servicios privilegiados y hubieran cumplido 40 años de edad. En este caso, el monto de la jubilación era de 3% del sueldo promedio sometido a una escala de rebajas por cada año de servicios privilegiados prestados. Cuando el afiliado excedía 40 años de edad se bonificaba el haber jubilatorio con 1.50%

⁴ Militar y político argentino; fue presidente de la república en dos periodos 1880-1886 y 1898-1904; dirigió la guerra del desierto contra los indios de la pampa. Impulsó la red ferroviaria, con apoyo de empresas británicas, y rompió relaciones con el Vaticano por haber establecido la enseñanza laica en las escuelas. Resolvió el problema fronterizo con Chile (1902).

worlds largest exporters of meat and cereals, while a rising industrial sector had developed, contributing to a 15% of the national product.

A debate on the role of the State in managing public services took place at this time, including the provision of pensions. Some considered these should be administered by private companies, while others supported public intervention in certain fields considered essential in the country's development. On this matter, Julio Argentino Roca wrote to Agustín de Vedia in 1887: “Supporting the theory that governments cannot administer would lead to the suppression of any and all governments on the base of their uselessness, and the customs administration, the post, the telegraph, the ports, revenue office, the army, and all that comprises the exercise and duties of the Power, should be put up for auction”⁴.

During the last administration of General Roca, the Project for a retirement and pensions scheme for public servants was designed, adopted in 1904 as law 4349, which granted in article 31 a *ordinary privileged retirement* at the age of 50 and accounting for 25 years of services to security and research agents of the ground and navy police; police drivers; chiefs, official and members of the fire brigade; prison personnel; members of the customs vigilance and security forces; full-time primary education teachers; personnel at leper hospitals; healthcare professionals providing related to radiology, neuro-psychiatric attention, infectious and contagious diseases or at facilities considered unsanitary by the National Directorate of Public Health.

Employees accounting for 15 years of service who had not yet reached the age of 50, were entitled to their ordinary privileged retirement, suffering from a 5% discount of the total amount for each anticipated year until the age of 50.

Voluntary retirement was granted to those affiliates having accounted by 20 years of privileged service and having reached the age of 40. In this case, the amount was 3% of the average salary submitted to a discount scale for each year of service provided. When the affiliate exceeded the age of 40, a 1.50% bonus was credited

⁴ Argentinean military man and politician; President for two non-consecutive periods (1880-1886, 1898-1904); led the desert war against the indigenous population of the Pampa region. He promoted the railroad network alongside British companies, and severed ties to The Vatican after introducing secular education. He was also responsible for bringing the frontier issue with Chile to an end (1902).

del sueldo promedio sometido a la mencionada escala, por cada año de edad excedente, sin que pueda ser mayor que el que le correspondería por jubilación extraordinaria u ordinaria anticipada.

Periodo de crisis institucional y de los cambios sociales (1930-1955)

En aquel periodo, se procuró acordar derechos sociales —incluyendo los previsionales— con frecuencia a iniciativa o por gestión de los trabajadores, con la concurrencia de esfuerzos públicos, sindicales y particulares. El anhelo de alentar su avance creciente, mediante todos los regímenes posibles, ha determinado que la previsión argentina se distinga por una heterogeneidad de medios, impulsados por las organizaciones gremiales, que han perfilado su singular característica. La Octava Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, celebrada en Ginebra, en 1947, declaró que: “las partes interesadas deberán participar en la gestión y control de la seguridad social, que en la medida de lo posible deberá ser confiada a organismos autónomos, y un lugar preeminente en esa gestión y control deberá concederse a los asegurados”⁵.

A continuación se detallan en un cuadro comparativo los años de servicios y edad de dichas cajas al año 1943.

Jubilaciones		Estado	Bancos	Ferrov.	Sv. Púb.	Periodist.	Montepío	Munic.
Ordinaria Integra	Servicios	30-25	30	32	30	30	30	-
	Edad	55-50	50	55	50	55	55-53	50
Ordinaria Reducida	Servicios	30	30	30	30	30	-	30
	Edad	-de 55	45 a 50	50 a 55	45	50 a 55	-	45
Invalidez	Servicios	20	10	+ de 15	+ de 10	10	15	15 (serv.) o 65 (edad)
	Edad	-	-	-	-	-	-	-
Retiro	Servicios	-	+ de 20	+ de 10	+ de 10	20/10	-	25
	Edad	-	-	50	50	50/55	-	-
Cesantía	Servicios	-	+ de 15	-	+ de 20	20	15	20
	Edad	-	-	-	-	50	45	-

La Caja Marítima al año 1943 no había definido los beneficios. Los espacios en blanco indican que no existe beneficio en la Caja respectiva. (Fuente: Ramírez Gronda, Juan D.)⁶.

⁵ El informe de la delegación argentina a la IIIa reunión de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), señala que la existencia de asociaciones profesionales, suficientemente desarrolladas y con conciencia de su responsabilidad social, puede contribuir a perfeccionar la protección de sus asociados, creando organismos propios con la ayuda y la supervisión del Estado... (Stafforini, Eduardo R. Orientaciones para el desarrollo de la seguridad social en las Américas. Buenos Aires, 1951, pág. 43).

⁶ Ramírez Gronda, Juan D. *Régimen Jurídico de las Jubilaciones*. Editorial Ideas, Buenos Aires, 1943.

to the average salary in said scale for each year exceeding the minimum age, though it could not exceed the amount to which the affiliate would be entitled to under extra-ordinary or ordinary early retirement.

Institutional crisis and social changes period (1930–1955)

During this period, social rights —including social security rights— were recognized in great part thanks to the initiative of the workers themselves, backed up by the public administration, unions and individuals. The desire to promote their advancement, by means of several different schemes, has led Argentinean social security to be characterized by a series of heterogeneous means set forward by workers unions. The 8th General Assembly of the International Social Security Association, which took place in Geneva in 1947, stated that “all interested parties shall participate in the administration and control of social securities, which must be trusted to autonomous bodies, and a preeminent role in this administration and control must be granted to the beneficiaries”⁵.

The following table compares the years of services accounted for and the retirement age in different trustees savings funds during 1943.

⁵ The report of the Argentinean delegation to the 3rd session of the Inter-American Conference on Social Security (CISS), states that the existence of professional associations, sufficiently developed and aware of their social responsibility, could greatly contribute to improving the protection of its associates by creating their own bodies supported and under the supervision of the State. (Stafforini, Eduardo R. Orientaciones para el desarrollo de la seguridad social en las Américas. Buenos Aires, 1951, pág. 43).

⁶ Ramírez Gronda, Juan D. *Régimen Jurídico de las Jubilaciones*. Editorial Ideas, Buenos Aires, 1943.

Retirement		State	Banks	Railroad	Public Servants	Journalists	Trustees	Munic.
Ordinary Full	Years of Service	30-25	30	32	30	30	30	-
	Age	55-50	50	55	50	55	55-53	50
Ordinary Reduced	Years of Service	30	30	30	30	30	-	30
	Age	under 55	45 to 50	50 to 55	45	50 to 55	-	45
Disability	Years of service	20	10	over 15	over 10	10	15	15 (serv.) or 65 (age)
	Age	-	-	-	-	-	-	-
Voluntary Retirement	Years of service	-	over 20	over 10	over 10	20/10	-	25
	Age	-	-	50	50	50/55	-	-
Severance	Years of service	-	over 15	-	over 20	20	15	20
	Age	-	-	-	-	50	45	-

The Navy Trustees Savings Fund had not yet defined benefits by 1943. Blank spaces indicate that the benefit was not available in that Trustees Fund. (Source: Ramírez Gronda, Juan D.)⁶

El entonces Coronel Juan Domingo Perón que integró el Gobierno del General Ramírez (1943-1944) como Secretario de Trabajo y Previsión y Presidente del Consejo Nacional de Previsión Social, el cual luego se convirtió en el Instituto Nacional de Previsión Social (Decreto Ley 29.176/44).

Los fines que inspiraron la creación del Instituto (octubre de 1944), según el decreto-ley de su creación era los siguientes: el Instituto deberá proporcionar los medios de existencia necesarios en caso de cesación o interrupción de la actividad profesional, prevenir los riesgos, velar por el bienestar social y económico de la familia y, en particular, de la madre y el niño, aplicar la medicina social conforme los métodos de medicina preventiva y curativa, de rehabilitación y reeducación, organizar el sistema de vivienda individual y colectiva, invertir fondos en obras de carácter social y utilidad pública y conceder préstamos de nupcialidad y natalidad.

El Instituto Nacional de Previsión Social aglutinó a diversas Cajas Nacionales de Previsión para el Personal del Estado, Personal Ferroviario, Servicios Públicos, Bancarios y Seguros, Periodismo, Navegación, Comercio y Actividades Civiles, Industria, Trabajadores Rurales, Trabajadores Independientes, Empresarios y Profesionales.

Periodo de las revoluciones cívico-militares (1955-1983)

Entre los años 1955 a 1960 el superávit de las Cajas de Jubilaciones y Pensiones fue equivalente a 27% del PBI. Pero estos excedentes desaparecieron; a mediados de los años sesenta ya no había superávit. Es por ello que el Gobierno del General Onganía ya encuentra un sistema que enfrenta demandas judiciales, por lo que a fines de 1966 se disponen

Colonel Peron was at that time a member of the administration of General Ramirez (1943-1944), having been appointed Minister of Labor and Welfare and President of the National Council of Social Welfare, which would later become the National Social Welfare Institute (by decree 29.176/44).

The mission of the Institute at the time of its creation in October 1944 was: to provide the necessary means for subsistence in case of severance or interruption of professional activities; to prevent risks; to provide for the social and economic well-being of the family, especially the mother the child; to supply social medicine in accordance to the breakthroughs in preventive and curative medicine, rehabilitation and reeducation; to organize the individual and collective housing system; to invest in projects of public utility and of a social nature; and to offer marriage and parenthood loans.

The National Social Welfare Institute gathered several National Trustees Savings Funds, including those of public servants, railroad personnel, public service, bank and insurance employees, journalists, trade navy, trade and civil activities, industry, rural workers, independent workers, entrepreneurs and professionals.

Civic-military revolutions period (1955-1983)

Between 1955 and 1960 superavit in Retirement and Pensions Savings amounted to a 27% of the NGP. However, this surplus disappeared; by the mid 1960's there was no longer superavit. By the time General Onganía took office, he found a system threatened by legal action, which led in 1966

las primeras medidas de pago escalonado o pautado de sentencias de reajustes por diferencias de movilidades fruto de las políticas adoptadas en esa época, que con el fin de obtener consenso y legitimidad, prometieron otorgar 82% móvil de la remuneración, pero en la práctica no alcanzaron a proporcionar ni 40% de dicha base.

Por ello, a partir del año 1967 mediante la Ley Número 17310, se unificaron todas las prestaciones que otorgaban las Cajas Nacionales de Previsión en sólo cuatro clases: La *jubilación ordinaria* que se concedía a los trabajadores que cumplían 60 años de edad, los varones, y 55 años de edad, las mujeres, acreditando además, como mínimo, 30 años de servicios computables, de los cuales 10 debieron ser con aportes (según Ley Número 17385) y los que hubiese prestado con anterioridad al 1 de septiembre de 1946 eran computados a simple declaración jurada del trabajador afiliado al sistema hasta completar los 30 años, formulándose un cargo de 5% del haber jubilatorio inicial por cada año de servicio y los prestados con posterioridad a dicha fecha, eran reconocidos por la Caja respectiva, formulándose un cargo de 10% de dicho haber por cada año de servicio reconocido; la *jubilación por edad avanzada* era otorgada a los trabajadores que cumplían 65 años de edad y 15 años de servicios, de los cuales 5 años deben estar prestados dentro de los últimos 8 inmediatos anteriores al cese; la *jubilación por invalidez* se otorgaba a los trabajadores que se incapacitaban desempeñando sus tareas con un grado invalidante, fijado en 66% o más de disminución física o psíquica del total de su capacidad de trabajo, pudiendo la Caja efectuar exámenes periódicos de su estado de salud, ya que el beneficio por invalidez se consideraba siempre provisional y recién cuando el trabajador cumplía los 55 años de edad y hubiera percibido durante 10 años el beneficio por invalidez, se declaraba definitivo. La *pensión* derivada de alguna de las prestaciones mencionadas (el afiliado por lo menos, debía encontrarse en posesión de su empleo a su fallecimiento para habilitar el derecho a pensión a sus causahabientes), fijándose el haber en 75% del monto jubilatorio que le hubiese correspondido al causante a su deceso. Dicho porcentaje se incrementaba en 5% por cada hijo menor o incapacitado y a cargo del causante hasta 100% del haber jubilatorio mencionado.

Régimen para trabajadores independientes, empresarios y profesionales

La Ley 17890 de septiembre de 1968, estableció una *antigüedad en la afiliación* de los citados trabajadores, que

to the first scheme of staggered payments derived from adjustments to compensate for mobility as a result of policies adopted at the time, when seeking consensus and legitimacy, an 82% on remuneration was pledged, although not even a 40% was actually delivered.

For this reason, in 1967, and in compliance with law N° 17310, all benefits provided by National Social Security Funds were gathered into four categories: *ordinary retirement*, granted to workers reaching 60 years of age in the case of men and 55 in the case of women who had accounted for 30 years of verifiable service, 10 of which had included contributions (in compliance with law N° 17385), while services provided before September 1st 1946 were considered simply under a sworn statement by the affiliate to the system until 30 years were accounted for. A 5% was charged for initial retirement for each year of service, and services provided after the aforementioned date were charged with a 10% for each year. *Old age retirement* was granted to workers reaching the age of 65 and accounting for 15 years of service, 5 of which had to have been provided during an eight-year period immediately prior to severance. *Disability retirement* was granted to workers disabled while providing professional services, resulting in a disability fixed at or above 66% of physical or mental work capacity, wherein the Fund was entitled to request periodic health examinations, seeing as how disability benefits were considered temporary until the worker reached the age of 55 after 10 years of being entitled to this compensation, when it was declared a permanent benefit. *Pensions* resulting from any of these benefits (the affiliate has to be in possession of the position at the time of death to entitle beneficiaries to a pension) were fixed at 75% of the retirement amount to which the deceased would have been entitled. That figure increased by 5% for each underage or disabled child depending on the deceased up to 100% of the retirement amount.

Independent workers, entrepreneurs and professionals scheme

Law 17890 of September 1968 established a *minimum affiliation antiquity* for workers, later to be known as

luego fueron llamados “autónomos”, para acceder aplicar a la *jubilación ordinaria*, de por lo menos diez años contados desde la afiliación formal al régimen jubilatorio de la Ley 14397, además de los restantes requisitos de edad y servicios que exigía esta última (60 años de edad para los varones o 55 años de edad en las mujeres y 30 años de servicios en condiciones similares a las que exigidas a los restantes trabajadores). También esta antigüedad en la afiliación se estableció para la *jubilación por invalidez y pensión (3 años)*. La falta de cumplimiento de este requisito, no era obstáculo para que, al vencimiento del plazo respectivo, el interesado percibiera la jubilación o pensión, ya que constituía un plazo de espera.

Sistema Nacional de Previsión Social

La Ley 17575 del 21 de diciembre de 1967, creó en reemplazo del Instituto Nacional de Previsión Social como organismo de conducción y supervisión del Sistema Nacional de Previsión Social, la Secretaría de Estado de Seguridad Social. Además fusionó las 13 cajas nacionales de previsión en tres, la Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles (que comprendía a las antiguas Cajas Bancaria y Seguros, comercio y actividades civiles, servicio doméstico, industria, navegación, periodistas y gráficos y trabajadores rurales), la Caja Nacional de Previsión para el Estado y Servicios Públicos (estado, ferroviaria y servicios públicos) y la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos (empresarios, profesionales y trabajadores independientes). También creó la Dirección General de Servicios Comunes de Previsión, la cual tenía a cargo la atención de los afiliados, empleadores y beneficiarios en todo el país, la fiscalización y recaudación de los aportes y contribuciones y aplicar los convenios internacionales en materia de reciprocidad jubilatoria suscriptos por la República Argentina (en aquella época existían convenios con España (Ley 17.218), Italia (Decreto-Ley 7672/63), Portugal (Ley 17.219), Uruguay (Ley 17.389); luego se celebró con Chile (Ley 19522) y Brasil (Ley 22.594), entre otros.

En el año 1970 se creó el Centro Único de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social que se ocupaba principalmente en crear las bases de datos de afiliados, de empleadores, de aportes y contribuciones, asignando cuentas individuales para cada afiliado y empleador.

the “autonomous”, in order to be entitled to *ordinary retirement*, of at least 10 years from the time of formal affiliation to the retirement scheme in accordance to Law 14397, in addition to the requirements in terms of age and years of services established for this benefit (60 years of age in the case of men and 55 in the case of women who had accounted for 30 years of service in similar conditions to those of the rest of the workers). This affiliation antiquity requirement was also established in the case of *disability retirement and pensions (3 years)*. However, lack of compliance with this requirement was not an obstacle for the beneficiary to receive the retirement benefits or pension at the end of this period, since it was considered waiting time.

National Social Security System

Law 17575 of December 21st 1967 created the Ministry of Social Security, replacing the National Social Welfare Institute as the leading and supervising body of the National Social Security System. The Ministry additionally fused the 13 existing national social security funds into three: the National Industry, Trade and Civil Activities Fund (gathering the former funds for banks and insurance companies, trade and civil activities, domestic service, industry, trade navy, journalists and graphics, and rural workers), the National State and Public Service Fund (State, railroads and public servants), and the National Social Security Fund for Autonomous Workers (Entrepreneurs, professionals and independent workers). Furthermore, the Department for Common Social Security Services was created, charged with the attention to affiliates, employers and beneficiaries all over the country; control and collection of contributions; and the application of international agreements subscribed by the Argentinean Republic regarding retirement reciprocity (at the time, agreements existed between Argentina and Spain (Law 17.218), Italy (Law decree 7672/63), Portugal (Law 17.219), Uruguay (Law 17.389); Chile (Law 19522) and Brazil (Law 22.594), among others.

In 1970, the Center for Social Security Data Processing was created, responsible for creating databases on affiliates, employers and contributions, assigning individual accounts for each affiliate and employer.

Regímenes comunes para los trabajadores en relación de dependencia y autónomos

A partir del 1 de enero de 1969 se sancionaron dos leyes trascendentales, la Ley 18.037 (régimen previsional para trabajadores en relación de dependencia) y la Ley 18.038 (régimen previsional para trabajadores autónomos) las cuales forman una suerte de “Código de Jubilaciones y Pensiones”. Todavía algunas disposiciones contenidas en estas leyes, se aplican en la actualidad dado que el nuevo sistema mixto de jubilaciones y pensión que rige desde julio del año 1994, no cuenta con un cuerpo legal sistematizado que permita dar solución a todas las situaciones que se plantean.

Los nuevos regímenes no innovaban respecto a los tipos de beneficio vigentes en aquel entonces —jubilación ordinaria, por edad avanzada y por invalidez, y pensión—, aunque se modificaron algunos aspectos de los requisitos necesarios para obtenerlos. Se mantuvo la edad para obtener la Jubilación Ordinaria que estatúa la Ley 17.310 -60 años, los varones y 55 años, las mujeres, para la jubilación ordinaria y 65 años para la edad avanzada, la cual eran acordes con las condiciones sanitarias y laborales de aquella época.

En cuanto a los trabajadores autónomos se fijó la edad en 65 años para los varones y 62 años para las mujeres, y en 70 años para la edad avanzada. Antes, la ley 14.397 establecía leyes similares a las de los regímenes para trabajadores en relación de dependencia. Esta medida, junto con el mantenimiento de la antigüedad en la afiliación como requisito esencial para acceder a la jubilación ordinaria (10 años de aportes regulares) y una política encaminada al saneamiento de los recursos del régimen autónomo (v.g. las moratorias e inscripciones masivas de los trabajadores autónomos instituidas por las leyes 17.122, 17.206, 18.826 y principalmente la ley 20.147 que creó un fondo de reserva permanente), permitió por muchos años autofinanciar el pago de las prestaciones con recursos.

Hasta el año 1968, el régimen jubilatorio argentino se ha visto gravemente afectado por los numerosos beneficios otorgados a edad temprana dado que 40% de los jubilados obtuvieron su beneficio con menos de 55 años sobre un universo de 1.237.628 al 30 de septiembre de 1968.

Una disposición de gran utilidad para la simplificación de administrativa del sistema, es la que para completar los 30 años de servicios requeridos, permite el cómputo a simple declaración jurada de los anteriores al 1 de enero de 1959, que excedieren del mínimo con aportes necesarios (desde la vigencia de la ley 17385 se exigió 10 años de

Common regimes for autonomous workers and those in relationships of dependence

Two fundamental laws were adopted as of January 1st 1969; Law 18.037 (social security regime for workers in relationships of dependence) and Law 18038 (social security regime for autonomous workers), which together composed a “Retirement and Pensions Code”, of sorts. Some of the provisions contained in these laws are currently applied, given that the mixed retirement and pensions system in force as of July 1994 lacks a systematized legal background that provides solutions for the different situations that may arise.

The regimes established at this time showed no improvements in terms of the benefits provided –ordinary retirement, old age retirement, disability retirement and pensions-, although some aspects of the requirements to be entitled to these were modified.

The required age to be entitled to ordinary retirement remained as stated by Law 17.310 – 60 years of age for men and 55 for women, and 65 for early retirement, in accordance to sanitary and work conditions at the time.

In the case of autonomous workers, the required age was fixed at 65 for men and 62 for women; 70 for early retirement. Before this, Law 14.397 established similar laws to those applying to workers in relationships of dependence. This measure, together with the affiliation antiquity required to be entitled to ordinary retirement (10 years of regular contributions) and policies aimed at reorganizing resources for the autonomous regime (moratoriums and massive registration of autonomous workers established by Laws 17.122, 17.206, 18.826 and especially Law 20.147, which created a permanent reserve fund), allowed for the self-financing of benefits for many years.

Until 1968, the Argentinean retirement regime was gravely affected by the many early benefits granted before the age of 55 to 40% of retirees in a universe of 1.237.628 in September 30 1968.

A very useful provision in simplifying the administration of the system, was that in order to account for the required the 30 years of service, a simple sworn statement was allowed in the case of services provided before January 1st 1959, exceeding the minimum contributions (since the entry into

servicios con aportes efectivos⁷, antes eran 5 años según el art. 27 de la ley 14.370). Esta medida amplió aún más las disposiciones contenidas en la ley 17.385 la cual según lo dicho más arriba, incluía en la declaración jurada de servicios los anteriores al 1 de septiembre de 1946. Una medida de este alcance debe establecerse en la actualidad aplicable al sistema integrado de jubilaciones y pensiones, ya que la declaración jurada para los que se encuentran en actividad y efectuado aportes a partir de 2008 no puede ser ejercida, debiendo reconocerse todo el periodo (30 años), creando un sinnúmero de trámites de reconocimiento, verificación y prueba de servicios que no fueron oportunamente incluidos en las bases de datos de afiliaciones, servicios y aportes del sistema previsional, y que en la actualidad, resulta difícil verificar por cuanto la mayoría de las empresas han desaparecido, por la crisis económica y la privatización de los servicios públicos, y como causa externa, por los efectos de la globalización del comercio e industria.

Innovaciones de importancia se propugnaron para la jubilación por invalidez. En cuanto al haber de dicha prestación se estableció que fuera equivalente en todos los casos a la jubilación ordinaria, con prescindencia que la invalidez se produzca o no como consecuencia de un acto de servicio, siempre que no hubieran transcurrido dos años entre el cese y la solicitud de beneficio y que acreditare como mínimo 10 años de servicios.

En cuanto a la determinación de los haberes y su movilidad se estableció un sistema de actualización de las remuneraciones por índices publicados anualmente por la Secretaría de Seguridad Social, calculados según las diferencias que registran la evolución de los salarios de diversas ramas de la industria y el comercio, relevadas según las encuestas anuales que realizaba dicha Secretaría. Las diferencias detectadas se trasladaban a los índices si significaban una suba de 10% en los montos salariales. La base jubilatoria se determinó en un periodo de 10 años calendarios de remuneraciones, actualizadas según los coeficientes mencionados, inmediatos anteriores al cese, del cual se seleccionaba los tres mejores años de remuneraciones actualizadas más favorables; luego se suman y se dividen por 36, obteniéndose así el sueldo promedio, del cual se aplica el porcentaje de 70 a 82% según la edad del afiliado, para arribar así al monto del haber jubilatorio inicial. Este haber inicial se actualizaba anualmente con los coeficientes de movilidad establecidos con el mismo método por la Secretaría de Seguridad Social.

⁷ La vigencia se fijó desde el 8 de agosto de 1967 (art. 11).

force of Law 17385, 10 years of verifiable contributions were required⁷. Before this, article 27 of Law 14.370 required only 5 years). This measure further extended the provisions contained in Law 17.385 which, as previously stated, included a sworn statement regarding services provided before September 1st 1946. A measure of such scope should be established in the current retirement and pensions system, since the sworn statement for those providing services and contributions as of 2008 is no longer a possibility, requiring verification of all 30 years, resulting in all sorts of recognition, verification and proof procedures for services which were not properly included in the database of affiliations, services and contributions of the social security system, and considering the difficulties of verifying this information given how many companies have disappeared as a result of the economic crisis and the privatization of public services, in addition to the globalization of trade and industry.

Relevant improvements were promoted in the case of disability retirement. Regarding the amount for this contingency, it was established that it should be equal in every case to that of ordinary retirement, whether or not disability is the result of the provision of professional services, as long as less than 2 two years had passed between severance and the application for this benefit, and 10 years of service were accounted for.

Regarding the determination of retirement assets and their mobility, a remuneration update system was created in terms of indexes published each year by the Ministry of Social Security, calculated according to differences registered in the evolution of salaries in different branches of trade and commerce, obtained from annual surveys carried out by the Ministry. The differences identified were converted into indexes if they accounted for a 10% increase in salaries. The retirement base was determined by a 10-year calendar of remunerations updated as previously explained, immediately prior to severance, out of which the three years with the most favorable remunerations were selected, added, and divided by 36, resulting in an average salary, of which a percentage between 70 or 82, depending on the age of retirement, determined the retirement amount. This amount was updated

⁷ Validity was determined as of August 8, 1967 (art. 11).

El haber actualizado mantuvo en los primeros años su relación proporcional con la evolución de los salarios. A partir del año 1973, con el advenimiento de la democracia el gobierno nacional estableció un nuevo sistema de previsión a través de la Ley 21.118 modificando la forma de cálculo del haber inicial en un porcentaje de 70% de la mejor remuneración o del promedio actualizado de los últimos 12 meses de remuneraciones. Luego del fallecimiento del General Perón (1973-1974), se inició en la Argentina un periodo de alta inflación que perjudicó sobre todo a los jubilados por la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes ya que los coeficientes establecidos para efectuar la movilidad en los haberes jubilatorios y de pensión no reflejaban cabalmente la pérdida de la real capacidad de compra de los salarios.

Con el golpe de estado efectuado en marzo de 1976, el gobierno militar dejó sin efecto la reforma introducida por la Ley 21.118, restableciéndose el régimen anterior instituido por las Leyes 18.037 y 18.038, con algunos cambios que no desnaturalizaron su estructura.

Época de consolidación democrática y social (1983-2007)

Con el inicio del nuevo periodo democrático, el gobierno liderado por el Presidente Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989) efectuó una reforma económica llamada el plan Austral que trató de frenar la inflación, creando un nuevo signo monetario el Austral que equivalía a \$a. 1.000 -aplicable a partir de junio de 1985. A partir de allí, se generó un profundo deterioro de los sueldos y de las jubilaciones y pensión ya que la inflación se recrudeció por falta de controles efectivos y poca o nula participación de los grupos económicos para la implementación de las medidas de estabilización económica, todo ello a fin de desacreditar al gobierno del Dr. Alfonsín.

En dicho periodo, se trató de paralizar los innumerables juicios entablados por los jubilados y pensionados con el dictado de los Decreto 2196/96 y 648/97 y creó un sistema de pago en cuotas de diferencias adeudadas en las jubilaciones y pensiones que al final el gobierno sólo cumplió la primera cuota y además bajó sensiblemente los haberes aplicando porcentaje de 27% para establecer el haber jubilatorio.

Los decretos mencionados fueron declarados inconstitucionales por la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social (creada en el gobierno de Alfonsín para tramitar las demandas de reajustes por movilidad, entre

yearly in accordance to mobility coefficients following the method of the Ministry of Social Security.

The updated assets remained proportional to the evolution of salaries for the first few years. However, as of 1973, the introduction of democracy into the national government established a new social security system by means of Law 21.118, modifying the calculation method of the initial asset at a 70% of the most favorable remuneration or the average salary received in the previous 12 months. Upon the demise of General Peron (1973-1974), a period of high inflation in Argentina affected especially retired workers, given the loss in purchasing power of their retirement benefits,

After the military coup of March 1976, the junta revoked the reforms introduced by Law 21.118, reestablishing the former regime in compliance with Laws 18.037 and 18.038, in addition to some minor changes that did not affect the general structure.

Democratic and social consolidation period (1983-2007)

The beginning of a new democratic period under the administration of President Raul Ricardo Alfonsin (1983-1989) brought about economic reform known as the Austral plan, which aimed at halting inflation by establishing a new currency in the form of the Austral, equivalent to \$a. 1.000.-, and applicable as of June 1985. However, from this date on, a serious deterioration of salaries, retirement assets and pensions took place, as a result of inflation worsened by the lack of effective control and minimal or null participation of economic groups in the implementation of economic stabilization measures, with the purpose of discrediting the government of Dr. Alfonsin.

During this period, the many trials initiated by retired workers and pensioners were interrupted by Decrees 2196/96 and 648/97, creating an installments payment system of pensions and retirement assets owed by the government. However, only the first payment was made, and it significantly reduced the amount by considering a 27% of retirement assets.

Both decrees were thus declared unconstitutional by the National Chamber of Appeals on Social Security (established by the government of Alfonsin to take care of mobility readjustment claims, in addition to others relating to legal action claiming refusal to

otras relativas a recursos por denegatorias de prestaciones de la seguridad social dictadas por la Cajas).

Con el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) se implementó una consolidación de deudas previsionales a marzo de 1991, ordenada por la ley 23.982 que permitía optar por el pago en bonos en dólares estadounidenses o en pesos o en efectivo, para abonar las deudas existentes por reclamos administrativos y judiciales. Además propició un cambio sustancial en el régimen previsional argentino, creando un sistema mixto, basado en el reparto asistido (Régimen Previsional Público o de Reparto) o en la capitalización individual (Régimen de Capitalización). El nuevo *Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones* instituido por la Ley 24.241, tiene las siguientes características:

- a) El Régimen Previsional Público establece prestaciones financiadas a través de un sistema de reparto asistido, cuyos recursos provienen de las contribuciones de los empleadores (16% de la remuneración imponible o menos según la zona o actividad desempeñada), de los aportes personales de sus afiliados (11% de la misma base remunerativa), o de recursos fiscales de afectación específica (IVA, impuesto a los combustibles, etcétera).
- b) Las prestaciones del Régimen Previsional Público son: La Prestación Básica Universal (PBU) que se otorga al afiliado del SIJP (independientemente de la opción que hubiera ejercido) que cumpla la edad (65 años los varones o 60 años las mujeres) y los servicios con aportes (30 años). A partir del año 2008 el afiliado no puede invocar la declaración jurada de servicios, salvo que el cese se hubiera configurado antes, es decir, en el periodo 2004 a 2007, en cuyo caso podrá computar bajo declaración jurada un determinado plazo según una escala establecida por la ley.

Año del cese	Declaración jurada
1994-1995	7 años
1996-1997	6 años
1998-1999	5 años
2000-2001	4 años
2002-2003	3 años
2004-2005	2 años
2006-2007	1 año

Asimismo, puede compensar el exceso de edad con la falta de servicios en la relación dos años de exceso de edad por un faltante en los servicios. También, existe la Prestación Compensatoria (PC) que es com-

provide social security benefits established by National Social Security Funds).

It was until the administration of Carlos Menem (1989-1999) that a consolidation of social security debt was implemented in March 1991, in compliance with Law 23.982, which provided the option of receiving payment in US Dollars or Argentinean Pesos for remaining debts resulting from administrative and legal actions. At this time, a substantial change in the Argentinean social security regime took place, with the creation of a mixed system based on assisted share (Public or Shared Social Security Regime) or in individual capitalization (Capitalization Regime). The new *Integrated Retirement and Pensions System (SIJP)* established by Law 24.241 is characterized as follows:

- a) The Public Social Security Regime establishes benefits finance by means of a assisted share system, resources for which come from contributions charged to employers (16% of the taxable remuneration or less, depending on the zone or activity), personal contributions of affiliates (11% of the same remuneration base), or specific revenue resources (AVT, fuel tax, etc.)
- b) Benefits included in the Public Social Security Regime are: Basic Universal Benefit (PBU), granted to those affiliated to the SIJP (regardless of the option chosen) who reach the required age (65 for men, 60 for women), and years of service with contributions (30). As of 2008, the affiliate cannot rely on a sworn statement, unless severance took place before this date, that is between 2004 and 2007, in which case a determined period according to a scale established by law may be considered.

Year	Sworn Statement
1994-1995	7 years
1996-1997	6 years
1998-1999	5 years
2000-2001	4 years
2002-2003	3 years
2004-2005	2 years
2006-2007	1 year

In addition, exceeding age may be compensated by lack of years of services provided: 2 years over the required age for every one year lacking services. Furthermore, the Compensatory

plementaria de la PBU, y representa los aportes que hubiera efectuado el afiliado del SIJP antes de julio de 1994 y su haber se determina sobre la base de 1.5% o fracción mayor a 6 meses, por cada año de servicios con aportes al antiguo régimen. Finalmente, establece una prestación adicional por permanencia (PAP) para los afiliados que hubieran optado o que estuviesen comprendidos en el Régimen Previsional Público, también complementaria de la PBU y que sustituye a la Jubilación Ordinaria que se otorga a los afiliados del Régimen de Capitalización Individual, cuyo haber será el representativo de los aportes personales al Régimen Público a partir del Julio de 1994 en adelante, en la proporción de 1.5% por cada año de servicios con aportes o fracción mayor a 6 meses (con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley 26.222, el porcentaje era del 0.85%).

- c) El Régimen de Capitalización determina prestaciones financiadas principalmente con los aportes personales (antes 7% de la base remunerativa, hoy 11% de dicha base) que integran una cuenta de capitalización individual que a su vez forman un fondo de jubilaciones y pensiones administrado por una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), la cual debe efectuar las inversiones taxativamente establecidas por la Ley 24.241 (títulos públicos, obligaciones negociables, debentures y otros títulos o valores representativos de deudas emitidas por empresas públicas o privadas, acciones representativas del capital de las sociedades anónimas, etcétera).
- d) La prestación que cubre la contingencia de vejez en el Régimen de Capitalización es la Jubilación Ordinaria (JO) y se otorga a los afiliados que eligieron ese régimen o que se encuentren incluidos en él por aplicación de la regla anterior a la última reforma introducida por la ley 24.241, la cual se hallaba incluida en el artículo 30 de la Ley misma que establecía la inclusión a capitalización de los nuevos afiliados al SIJP, cuando no ejercían la opción expresa por el régimen de reparto⁸ (la situación es diferente ya que los afiliados que no expresen su decisión ahora, quedan incluidos automáticamente en el Régimen Previsional Público, según lo determina la ley 26.222). Los requisitos exigidos por la ley es el cumplimiento de la edad jubilatoria (65 años de edad los varones y 60 años las mujeres). El pago de la prestación se fija en función del nivel de los fondos atesorados en la cuenta de capitalización

⁸ Decreto 56/94.

Benefit (PC) complements the PBU, representing contributions made by the affiliate to the SIJP prior to July 1994, where assets are determined on the base of a 1.5% or fraction over 6 months, for each year of services provided contributing to the former regime. Finally, an Additional Permanence Benefit (PAP) is granted to those who choose or were considered by the Public Social Security Regime, also complementing the PBU and replacing Ordinary Retirement granted to affiliates of the Individual Capitalization Regime, the assets of which are comprised of personal contributions to the Public Regime as of July 1994, by 1.5% for each year of service provided and contributing or fraction over 6 months (prior to the adoption of Law 26.222, this percentage was only 0.85%).

- c) The Capitalization Regime determines financial benefits mainly as the result of personal contributions (previously 7% of the remuneration base, currently 11% of said base), integrating an individual capitalization account which is part of a retirement and pensions fund administered by a Retirement and Pension Funds Administrator (AFJP), which must carry out taxable investments as established by Law 24.241 (public bonds, negotiable obligations, and other representative bonds or shares emitted by public or private entities, shares representing the capital of anonymous societies, etc.
- d) The benefit covering old age contingency in the Capitalization Regime is the Ordinary Retirement Scheme (JO), granted to affiliates who have chosen this regime or are considered by it in compliance with the latest reform established in article 30 of Law 24.241, setting up the inclusion to capitalization of new affiliates to the SIJP who did not expressly choose the shared regime⁸ (nowadays, affiliates who do not choose between both options are automatically included into the Public Regime, as determined by Law 26.222). The law requires reaching retirement age (65 years for men, 60 for women). The payment of this benefit is fixed according to the added funds in the affiliate's capitalization account, made up of personal contributions, depos-

⁸ Decree 56/94.

del afiliado, integrados por los aportes personales, los depósitos convenidos e imposiciones voluntarias⁹ y la rentabilidad del fondo fruto de las inversiones efectuadas por la AFJP (retiro programado, retiro fraccionario y renta vitalicia).

Las modalidades de pago de la jubilación ordinaria del Régimen de Capitalización son tres:

its and voluntary impositions⁹, as well as, the profitability of the fund, resulting from investments undertaken by the AFJP (programmed withdrawal, fractioned withdrawal and annuity).

Retirement benefit payment modalities in the Capitalization:

Modalidad	Entidad que la concede	Fondos afectados	Base jubilatoria	Plazo de percepción	Derecho-habientes de pensión
Retiro programado	AFJP	Todos los fondos de la cuenta	Cinco últimos años de remuneraciones	En un solo pago o en montos periódicos	Eventualmente se entregan los fondos disponibles
Retiro fraccionario	AFJP	Todo o parte ^(*) de los fondos de la cuenta	Cinco últimos años de remuneraciones—	Hasta que se agoten los fondos capitalizados	Se consideran para el cálculo
Renta vitalicia	Compañía de seguros de retiro	Todo o parte ^(*) de los fondos de la cuenta	Cinco últimos años de remuneraciones—	Vitalicia	Se consideran para el cálculo

^(*) Si el haber resulta superior a tres veces el importe de la pbu máxima y 70% de la base jubilatoria.

Modality	Granting entity	Funds affected	Retirement base	Installments	Pension right-holders
Programmed withdrawal	AFJP	All funds in the account	5 previous years of remunerations	One payment in periodic installments	Available funds are eventually delivered
Fractioned withdrawal	AFJP	All or some ^(*) funds in the account	5 previous years of remunerations	Until all capitalized funds have been delivered	Considered in calculation
Annuity	Retirement insurance company	All or some ^(*) funds in the account	5 previous years of remunerations	Permanent	Considered in calculation

^(*) If the assets exceed three times the amount of the maximum PBU and 70% of the retirement base.

e) Las prestaciones que cubren o integran su financiamiento ambos regímenes son: El retiro por invalidez (transitorio o definitivo); pensión por fallecimiento de afiliado o beneficiario y prestación por edad avanzada: La primera cubre la contingencia de invalidez cuando ésta es equivalente o supera 66% de la disminución total en su capacidad de trabajo, en tanto no tuviese más de 65 años de edad y reuniera la condición de aportante regular o irregular con derecho a la fecha de su solicitud* y para la pensión el causante debe reunir también a la fecha de su fallecimiento la condición de aportante ya enunciada para el retiro por invalidez.

e) Benefits which are covered for financed jointly by both regimes are: disability retirement (both temporary and definitive); pension resulting from the beneficiary's death; and old age retirement. The first covers a disability determined at or over 66% of diminished total work capacity, as long as the worker has not reached the age of 65 and remained a regular or irregular contributor at the time of applying for this benefit. In order to be entitled* to a pension, the beneficiary must have been a contributor up to the time of decease under the same conditions that apply for disability retirement.

⁹ Los depósitos convenidos son sumas depositadas por el empleador en la cuenta del empleado, en cambio, las imposiciones voluntarias son sumas que deposita en su cuenta el afiliado con el fin de incrementar su haber de jubilación ordinaria o anticipar su jubilación (artículos 56 y 57 de la Ley 24.241).

* Condición de aportante para tener acceso al retiro por invalidez o la pensión por fallecimiento del afiliado.

⁹ Deposits are sums entered by the employer into employees' accounts, whereas voluntary impositions are deposited by affiliates into their own accounts in order to increase the assets of their ordinary retirement or to anticipate retirement (articles 56 and 57 of Law 24.241).

* Contribution requirement in order to be entitled to disability retirement or pension resulting from the beneficiary's death.

Servicios continuos	Regular	Irregular con derecho	Servicios discontinuos	Regular	Irregular con derecho
Dentro de los 36 últimos meses.	30 meses	18 meses	Dentro de los 36 últimos meses	10 meses	6 meses
Con 30 años aportados	Si	-	Con 10 años aportado	Si	-
Con 15 años aportados	-	Si acredita 12 meses aportados dentro de los últimos 60	Con 5 años aportados	-	Si acredita 4 meses aportados dentro de los últimos 20
Período inferior a 36 meses	n°m x 30/36 ^(*)	n°m x 18/36	Período inferior a 36 meses	n° m x 10/36	n°m x 6/36

^(*)Si el periodo de afiliación fuese inferior a 36 meses se considerará para determinar la condición de aportante, el producto del total de meses de afiliación (n° m) por las proporciones establecidas para los restantes afiliados con una antigüedad igual o mayor a 36 meses, según se trate de servicios continuos (30/36; 18/36; 10/36; 6/36).

Uninterrupted service	Regular	Irregular	Interrupted service	Regular	Irregular
During the previous 36 months.	30 months	18 months	During the previous 36 months.	10 months	6 months
30 years' worth of contributions	Yes	-	10 years' worth of contributions	Yes	-
15 years' worth of contributions	-	If capable of accrediting 12 years' worth of contributions during the previous 60 months	5 years' worth of contributions	-	If capable of accrediting 4 years' worth of contributions during the previous 20 months
Under 36 months	(# of months) 30/36 ^(*)	(# of months) 18/36	Under 36 months	(# of months) 30/36 ^(*)	(# of months) 6/36

^(*)If the affiliation period were less than 36 months, contributions will be considered the result of multiplying the number of months by the requirements established for affiliates over 36 months, depending on the period of uninterrupted services }(30/36; 18/36; 10/36; 6/36).

Con relación a los parientes del causante que puedan acceder a la pensión, la ley 24.241 enumera al viudo o viuda, conviviente e hijos menores e incapacitados, que estuviesen a cargo del causante a su deceso. La enumeración de los parientes es taxativa, y comparando ésta con las leyes anteriores o los que enumera la ley de riesgos del trabajo, está sustancialmente reducida. El financiamiento tanto del retiro por invalidez como de las pensiones de afiliado en actividad, de los que estuviesen comprendidos en el régimen de capitalización, está compartido con el régimen previsional público cuando el afiliado hubiera cumplido más de 35 años de edad al 15/7/94 o la afiliada tuviera más de 25 años de edad a dicha fecha¹⁰. El haber del retiro por invalidez se establece en 70% para los afiliados

Regarding the beneficiary's next-of-kin which are entitled to a pension, Law 24.241 recognizes the widow or widower living with minor or disabled children who depend on the beneficiary at the time of his or her death. Additional relatives are limited, and in comparison with previous laws, or those considered by legislation on working risks, this one is substantially reduced. Financing for both disability retirement benefits and pensions considered by the capitalization regime is shared with the public regime in those cases in which affiliates have reached the age of 35 by July 15 1994, in the case of men, or 25 in the case of women¹⁰. Retirement assets are fixed at 70%

¹⁰ Decreto 55/94.

¹⁰ Decree 55/94.

regulares y en 50% para los afiliados irregulares con derecho. El haber de la pensión se establece desde 70 a 100 % de la prestación de referencia del causante, según el número de derechohabientes que concurran en el beneficio. Finalmente, la edad avanzada está financiada por el régimen previsional público los componentes de PBU y PC y PAP si la opción es por reparto y el régimen de capitalización financia la JO por la modalidad de pago que corresponda, si la opción está registrada en dicho régimen. El haber de la prestación por edad avanzada se compone con 70% de la PBU, más el importe de la PC y PAP o la JO, estas últimas, según corresponda a la opción de reparto o capitalización. Los afiliados mayores a 65 años gozan de la prestación por edad avanzada si reúnen la condición de aportante y acreditan la incapacidad de grado invalidante. Los derechohabientes del afiliado fallecido encuadrado en este último supuesto gozarán de 70% de la pensión calculada sobre los componentes que le hubiesen correspondido a aquél.

El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones entró a regir en la República Argentina en Julio de 1994¹¹. Y desde entonces ha recibido críticas y aceptaciones¹².

Desde su puesta en marcha, la falta de un orden sistemático en la ley, ha llevado a tener una serie innumerable de normas aclaratorias y complementarias que dificultan la interpretación¹³.

Hoy, el sistema jubilatorio abarca 14 millones de afiliados (11.3 millones de afiliados a las AFJP y 2.5 millones afiliados al Estado)¹⁴.

Comenzó a regir con la posibilidad de los trabajadores de optar por el régimen de reparto (estatal) o el de capitalización, este último administrado por sujetos de derecho privado: las AFJP, pero en una dirección sin retorno. Es decir, quien optaba por el régimen de capitalización o no ejercía la opción por el régimen público dentro del plazo de 90 días, no podía pasar luego al régimen de reparto; sí a la inversa.

El Poder Ejecutivo Nacional en febrero de 2007 envió un proyecto de ley al Congreso para reformar el régimen previsional, que fue sancionado el 28/2/2007 y se transformó en la ley 26.222 (B.O. DEL 8/3/2007).

for regular affiliates and at 50% for irregular affiliates. Pension assets are fixed between 70 and 100% of the beneficiary's remuneration, according to the number of dependants entitled to this benefit. Finally, PBU, PC and PAP components of old age retirement benefits are financed by the public regime in the case of shared modality, and the capitalization regime finances the respective modality of JO if the affiliate chose this regime. Old age retirement benefits are composed of 70% of the PBU, in addition to the amounts of PC and PAP or JO, depending on the modality chosen. Affiliates over 65 years of age are entitled to old age retirement if they fulfill the contributions requirement and can accredit disability. Next-of-kin of the deceased beneficiary which fulfills these requirements shall be entitled to 70% of the pension to which the affiliate would have been entitled.

The Integrated Retirement and Pensions System which entered into force in the Argentinean Republic in July 1994¹¹ has been both criticized and complimented.¹²

Since its implementation, the lack of a systematic order in the law that created it, has led to a series of clarifying and complementary regulations that difficult its interpretation¹³.

Nowadays, the retirement system comprised 14 million affiliates, (11.3 million affiliated to AFJPs and 2.5 millions affiliated to the State).¹⁴

At first, it operating offering workers a choice between a shared (public) and capitalization regime, the latter administered by private entities known as AFJPs, but without the option of switching between one and the other. That is to say, those who chose the capitalization regime or did not express their choice for the public regime in a 90-day period could not switch back to the shared regime, and vice versa.

The Executive sent a bill to Congress in February 2007 to reform the social security system, which was

¹¹ El libro 1 de la ley 24.241 que instituyó el actual sistema integrado de jubilaciones y pensiones rige desde el 15 de julio de 1994. Artículo 129 de la citada ley y su reglamentación Decreto Núm. 56/94.

¹² Carcavallo, Hugo R. "La Reforma Previsional" (Presentación de la Ley 24.241), La Ley, 1993-E, 977. Buenos Aires, Argentina.

¹³ La opinión de la Doctrina fue unánime en este aspecto.

¹⁴ Fuente: ANSES.

¹¹ Section 1 of Law 24.241, which established the current integrated retirement and pensions system, has been in force as of July 15 1994. Article 129 of said law and rules included in Decree No. 56/94.

¹² Carcavallo, Hugo R. "La Reforma Previsional" (Presentación de la Ley 24.241), La Ley, 1993-E, 977. Buenos Aires, Argentina.

¹³ The opinion on the Doctrine was unanimous in this sense.

¹⁴ Source: ANSES.

La nueva ley permite –entre otras modificaciones– que los trabajadores afiliados a la jubilación privada puedan reingresar al sistema estatal si así lo desean. Se prevé que dicha opción pueda efectuarse dentro de un periodo de 180 días cada cinco años. En la primera etapa que estuvo vigente desde el 12 de abril hasta el 31 de diciembre de 2007 la migración se pudo efectuar sin límite de edad¹⁵.

En la segunda etapa vigente desde el 1 de enero de 2008, quedan excluidos los afiliados que tengan más de 50 años (en el caso de las mujeres) o más de 55 años (en el caso de los hombres) y cuyos fondos en su cuenta individual de capitalización no alcancen la suma de \$20.000.

Los aportes de los trabajadores indecisos que no elijan por uno u otro sistema dentro de los 90 días de iniciado el vínculo laboral, se direccionan al régimen de reparto. Esto revierte el esquema trazado en el marco inicial de la ley 24.241, donde en sus comienzos esos aportes del grupo de trabajadores indecisos iban al régimen de capitalización¹⁶.

Esta medida reconoce el derecho inalienable de naturaleza alimentaria del trabajador y de su grupo familiar, de acceso a la prestación previsional que necesita de una tutela especial y particular del Estado¹⁷.

Principales cambios introducidos por la ley 26.222:

- 1 El aporte del trabajador en ambos regímenes es el mismo a partir del 1 de enero de 2008 (11%) o a partir del 1 de abril de 2007 para los nuevos afiliados.
- 2 Se unifica en 1.5% de la base jubilatoria promedio de los últimos 10 años para los trabajadores dependientes o de toda la historia laboral con aportes para los trabajadores autónomos o monotributistas, por cada año aportado, lo que produce una sensible mejora para el cálculo de la Prestación Adicional por Permanencia del régimen de reparto. La parte del régimen de reparto se calcula según el sueldo promedio de los últimos 10 años (trabajadores en relación de dependencia) o de todas las categorías o rentas aportadas (trabajadores autónomos) y la cantidad de años aportados¹⁸; la parte del régimen de capitalización (Jubilación Ordinaria), se calcula según lo acumulado en la cuenta individual del trabajador que aportó.

¹⁵ Art. 14 de la Ley N° 26.222 y art. 1, inc. g) del Decreto 313/2007.

¹⁶ Art. 30 de la ley N° 24.241(texto según ley N° 24.347) que rigió hasta el 31 de marzo de 2007.

¹⁷ Álvarez. Alejandro Ramiro y otros. Reforma Previsional. Suplemento de Actualidad de La Ley 13/02/2007. Buenos Aires. Argentina.

¹⁸ Rige a partir del 1° de julio de 2007 según el Decreto N° 313/07 arts. 1° y 2°.

adopted February 28, 2007 and became Law 26.222 (published March 8 2007).

The new law allows –among other modifications– for affiliated workers to private retirement regimes to reenter the public system if they wish to do so. This option would be available for a 180-day period every five years. The first stage, April 12 to December 31 2007, allowed for the switch regardless of age restrictions¹⁵.

The second stage, open as of January 1st 2008, excludes affiliates over 50 years of age (in the case of women) and 55 years (in the case of men) whose assets in the capitalization amount are under 20000.

Contributions from undecided workers who do not choose between either regime are diverted to the shared regime. This measure reverts the scheme established in Law 24.241, which integrated those contributions to the capitalization regime¹⁶.

The initiative recognizes workers and their families the inalienable rights to food, access to social security which require special attention on behalf of the State¹⁷.

Main changes resulting from Law 26.222:

- 1 A worker's contribution in both regimes is the same as of January 1, 2008 (11%), or starting April 1, 2007 for new affiliates.
- 2 1.5% is the unified average pension basis for the next 10 years for dependent workers or from all work history with contributions from independent or mono-contributing workers, for each contributory year, thus producing a significant improvement for the estimation of Additional Benefit for Permanence in a shared regimen. This shared regime is estimated according to the average salary of the last 10 years (dependent workers) or of all categories or rents contributed (independent workers) and the amount of contributory years¹⁸; the capitalization regime (Ordinary Pension), is estimated according to accumulation in individual accounts of the contributing worker.

¹⁵ Art. 14, Law N° 26.222; art. 1, sub-section g) of Decree 313/2007.

¹⁶ Art. 30, Law 24.241(text according to Law 24.347), in force until March 31 2007.

¹⁷ Álvarez. Alejandro Ramiro y otros. Reforma Previsional. Suplemento de Actualidad de La Ley 13/02/2007. Buenos Aires. Argentina.

¹⁸ In force as of July 1, 2007, in compliance with articles 1 and 2 of Decree 313/07.

- 3 El aporte jubilatorio se aplica sobre los sueldos de los trabajadores hasta un tope de \$6.000 mensuales, en lugar de \$4.800. A partir del 1 de septiembre de 2007, el tope asciende a \$6.750 mensuales¹⁹. Los aportes simultáneos por percibir más de una remuneración o renta se computarán separadamente a los fines de la aplicación del tope máximo vigente.
- 4 Los fondos acumulados de los que pasaron al Estado quedan en la AFJP y sigue teniendo la rentabilidad que obtengan en la Administradora.
- 5 Por cada año aportado al Estado, la ANSES reconoce 1.5% del sueldo promedio hasta 35 años para la Prestación Compensatoria y sin límite para la Prestación Adicional por Permanencia²⁰.
- 6 El Estado sigue garantizando un haber mínimo a los afiliados al Régimen Estatal y a los que se jubilen a través de las AFJP y cobren una parte del Estado²¹.
- 7 Los fondos disponibles que financian el régimen previsional público, serán invertidos conforme a lo dispuesto por la Ley Núm. 24.156²² y deben ser utilizados únicamente para efectuar los pagos de los beneficios del sistema.
- 8 Los trabajadores que al llegar a los 50 años (mujeres) o 55 años (hombres) tengan ahorrado en la AFJP menos de \$20000 “serán considerados afiliados al régimen previsional público”. En tal caso, los fondos que tengan acumulados en la AFJP son transferidos dentro del plazo de 90 días al Estado, salvo que el afiliado manifieste expresamente su voluntad de permanecer en el régimen de capitalización. Para evitar que se jubilen con un haber inferior a la mínima, se les permitirá pasarse al régimen de reparto con la garantía de que cobrarán la jubilación mínima y cobrarán íntegramente su haber del Estado²³.
- 9 Cada cinco años se puede optar por el sistema público o por las AFJP. La primera vez no habrá límites de edad. El último cambio de régimen se puede realizar 10 años antes de cumplir la edad mínima de jubilación. Los que no opten permanecerán en el sistema que están con la salvedad indicada en el punto 7.
- 10 Los que empiezan a trabajar por primera vez (aproximi-

- 3 Retirement contribution is applied to salaries of workers up to a ceiling of \$ 6.000 per month, instead of \$4,800. As of September 1, 2007, the ceiling goes up to \$ 6,750 monthly¹⁹. Simultaneous contributions for the perception of more than one salary or rent will be computed separately so as to apply the maximum prevailing ceiling.
- 4 Funds accumulated by those affiliates who switched to the public regime are to remain within the AFJP and enjoy the profitability derived from it.
- 5 For each year of contribution to the State, ANSES acknowledges 1,5% of average salary up to 35 years for the Compensatory Benefit, and no limit for the Additional Permanence Benefit²⁰.
- 6 The State shall continue to guarantee minimum retirement assets to those affiliated to the Public Regime and those who retire under the AFJP scheme and collect a share from the State²¹.
- 7 Available funds for financing the public security regime, will be invested according to dispositions of Law No. 24,156²² and must be utilized exclusively for making payments of the system benefits.
- 8 Workers that upon reaching 50 years of age (women) or 55 years of age (men) have saved less than \$ 20,000 through AFJP will be “considered affiliates of the public security regime”. In such case, funds accumulated by the AFJP are transferred within 90 days to the State, except when the affiliate expresses his will to remain within the capitalization regime. In order to avoid workers retiring with retirement assets below the minimum, they will be allowed to switch to the shared regime, guaranteeing the collection of minimum retirement pension in addition to their public assets²³.
- 9 It is possible to chose between the public system of AFJP every five years. The first time there will be no age limit. The last change of regime can be made 10 years before the minimum retirement

¹⁹ Decreto N° 1346/07.

²⁰ Decreto N° 679/95.

²¹ Art. 11 Ley N° 26.222.

²² Ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional.

²³ Se implementará el acceso a una Prestación por Edad Avanzada Solidaria (art. 3 del Decreto 313/07).

¹⁹ Decree 1346/07.

²⁰ Decree 679/95.

²¹ Art. 11, Law 26.222.

²² Law of financial administration and national public sector control systems.

²³ Implementing access to Solidary Old Age pension benefits (article 3, Decree 313/07).

madamente 50 000 personas al mes) y no optan ni por el Estado ni por una AFJP durante los primeros 90 días quedan afiliados al régimen de reparto. Luego pueden optar por una AFJP²⁴. Antes eran enviados a las AFJP sin poder cambiar a reparto.

- 11 Las AFJP pueden cobrar hasta 1% del sueldo como comisión propia. Y restarán de la rentabilidad de las inversiones el seguro que financia la pensión de invalidez y muerte.
- 12 En lugar de deducir el costo del seguro previsional –que financia las pensiones de invalidez y fallecimiento– del aporte del trabajador, la reforma dispone que se deduzca del saldo de la cuenta.
- 13 Las AFJP deben invertir entre 5% y 20% del fondo total en bonos y papeles destinados a financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo.
- 14 En el futuro no pueden establecerse regímenes especiales si previamente la Secretaría de Seguridad Social no elabore un informe que asegure el adecuado financiamiento; también prevé la ley de reforma el relevamiento de dichos regímenes existentes por parte de dicha Secretaría²⁵.
- 15 El Poder Ejecutivo queda facultado para reglamentar todos los artículos de la ley²⁶.
- 16 La ley además beneficia a más de 230 000 (casi 160 000 varones y casi 70 000 mujeres) personas que se jubilaron después de 1994, ya que recibirán un ajuste en sus haberes, ya que eleva de 0.85 % a 1.5% el cálculo de la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) en el sistema público. Desde la vigencia de la ley 24.241 se jubilaron casi 500 000 personas, pero a los casi 270 000 restantes si bien se les ajusta el haber histórico, el aumento queda absorbido porque el incremento del haber mínimo fue superior al que surge de actualizar la PAP. Ese beneficio corresponde tanto a los jubilados por el Estado con a los que accedieron al beneficio a través de una AFJP pero sólo por los aportes hechos al régimen público después de 1994, cuando entró a

age. Those not choosing a change will remain in their current systems with the exception made on point 7.

- 10 Those who work for a first time (approximately 50,000 persons a month) and who do not chose Esther the State or an AFJP²⁴ during the first 90 days will be affiliated to the shared regime. They may later on chose an AFJP. In the past, they were normally sent to AFJP without the possibility of changing to the shared regime.
- 11 The AFJP may charge up to 1% of a salary per commission. And will subtract from the investment utilities that insurance which finances the pension for disability and death.
- 12 Instead of deducting the security insurance cost –financing the disability and death pensions– from the workers contributions, this reform decides that it will be deducted from the account balance.
- 13 The AFJP will invest between 5% and 20% of the total fund in bonus and documents destined to finance productive or infrastructure projects on the medium and long terms.
- 14 Special regimes cannot be established in the future if the Social Security Ministry has not previously elaborated a report that ensures adequate financing; the reform law also foresees replacing existing regimes on behalf of said Ministry²⁵.
- 15 The Executive Power is entrusted with regulating all articles pertaining to the law²⁶.
- 16 The law also benefits over 230.000 (almost 160.000 men and almost 70.000 women) persons that retired after 1994, as their assets will be adjusted, as it rises the estimation of Additional Benefit for Permanence (PAP) in the public system from 0.85% to 1.5%. Almost 500,000 persons retired since law 24.241 entered into force, but for the remaining 270,000 who will have their historic assets adjustment, this increase is absorbed as

²⁴ Resolución DE ANSES N° 212/07 – Los datos de inclusión de nuevos afiliados fue proporcionado por ANSES.

²⁵ Artículos 12 y 16 de la Ley N° 26.222.

²⁶ Decreto N° 313/07 – Se encuentran en elaboración varios reglamentos sobre: los trabajadores incorporados en el régimen de Monotributo, el cálculo del período de aportes faltantes para acceder a la Prestación por Edad Avanzada Solidaria (art. 3 del Decreto 313/07), el Fondo Solidario de Financiamiento de las Prestaciones de Invalidez y Fallecimiento (art. 10 Ley 26.222), el cómputo de aportes simultáneos para determinar la PC y PAP, entre otros.

²⁴ ANSES Resolution 212/07 – Data on new affiliates provided by ANSES.

²⁵ Articles 12 and 16, Law 26.222.

²⁶ Regulations are being drafted regarding: workers incorporated to the Monotribute scheme, calculation of pending contributions to become entitled to Solidary Old Age pension benefits (article 3, Decree 313/07), Solidary Disability and Death Pension Benefits Financing Fund (article 10, Law 26.222), tallying of simultaneous contributions to determine PC and PAP, among others.

regir la anterior reforma previsional. A las personas que se jubilen desde la vigencia de la reforma también se les reconoce por efectuados al Estado 1.5% desde 1994 en adelante.

17 La Ley 26.222 (B. O. del 8/3/2007) dispuso que la facultad para elegir entre el régimen de reparto o el de capitalización a partir del 12 de abril de 2007 y por un lapso de 180 días que feneció el 31 de diciembre de 2007, con una prórroga de 10 días ante el Correo Argentino o de OCA para presentar los formularios de opción por reparto emitidos hasta el citado día Dicho plazo venció el 15 de enero de 2008. El nuevo período de opción volverá a abrirse dentro de cinco años. En el 2012, se podrá volver a realizar los traspasos entre ambos sistemas jubilatorios.

18 Se modificó el principio de ley aplicable para acceder a las prestaciones previstas en el sistema. El artículo 13 de la Ley Núm. 26.222 determina que el derecho a las prestaciones se rige para las jubilaciones por la ley vigente al cese en la actividad o a la solicitud, lo que ocurra primero, y para las pensiones por la ley vigente a la fecha de la muerte del causante.

Además, el mencionado artículo 13 de la Ley Núm. 26.222 (párrafo segundo) estatuye que "... si a lo largo de la vida laboral, el solicitante cumpliera los extremos necesarios para la obtención del beneficio por un régimen diferente, podrá solicitar el amparo de dicha norma, en los términos del primer párrafo del artículo 82 de la Ley Núm. 18.037", por lo que a la luz de dicha norma, la disposición derogada reviste el carácter de ultra activa, cobrando vigencia al momento en el cual el peticionario la invocare para el logro del beneficio que ella establece, todo ello según el principio de imprescriptibilidad de los derechos a los beneficios acordados por las leyes de jubilaciones y pensiones, cualesquiera fueren su naturaleza y titular, que declara el primer párrafo del citado artículo 82²⁷.

²⁷ Sergio Tomás Massa y Miguel A. Fernández Pastor. De la exclusión a la inclusión social. Reformas de la reforma de la seguridad social. Telam Prometeo Libros. 2007 Págs. 212/213.

the rise in minimum assets was superior to the one resulting from the PAP update. This benefit corresponds to the State retired workers as well as to the ones accessing this benefit through an AFJP, but only through the contributions made to the public regime after 1994, when the former security reform entered into force. People retiring since the reform will have 1,5% of contributions made to the State acknowledged since 1994 onwards.

17 Law 26.222 (published March 8 2007) established the possibility of choosing between the public and capitalization regimes as of April 12 2007 for a period of 180 days which ended December 31 2007, allowing for a 10 day extension in the case of submission forms issued on this deadline before the Argentinean Post or the OCA. This postponement expired January 15 2008. The new regime selection period will be available 5 years from this date, in 2012, allowing for switches between both regimes.

18 The principle of law applicable to be entitled to social security benefits granted by the system was modified. Article 13 of Law 26.222 determines that the right to social security benefits is effective for pensions in compliance with the law in force at the time of severance or application for retirement, and at the time of death in the case of pensions.

Furthermore, Article 13 of Law 26.222 (second paragraph) establishes that "...if during his or her professional life, the petitioner were to fulfill the requirements need to obtain benefits under a different regime, he or she may uphold this regulation, in accordance to the first paragraph of Article 82, Law 18.037", by which the revoked provision takes precedence if the petitioner were to claim the benefits granted by it, in compliance with the principle of non-prescription of rights to benefits granted by retirement and pensions laws, regardless of their nature and titularity, stated in the first paragraph of Article 82²⁷.

²⁷ Sergio Tomás Massa y Miguel A. Fernández Pastor. De la exclusión a la inclusión social. Reformas de la reforma de la seguridad social. Telam Prometeo Libros. 2007 Págs. 212/213.

Conclusión

La reforma introducida por la Ley Núm. 26.222 permite incorporar al derecho positivo argentino una iniciativa que se originó en el propio gobierno nacional, inspirada en el respeto a los derechos y garantías de la persona humana en su condición de trabajador, incluyendo a su grupo familiar, consagrados en la Constitución Nacional de la República Argentina (art. 14 bis) y en los Tratados y Convenciones sobre los Derechos Humanos incorporados en ella con jerarquía constitucional, con el objeto de ampliar la cobertura en los casos de disminución, suspensión o pérdida de la capacidad para el trabajo, con el mejoramiento del acceso y la cuantía de las prestaciones previsionales, especialmente las que están a cargo del Estado Nacional, para propender a la consolidación de principios espirituales y morales inspirados en la solidaridad intergeneracional que constituyen la esencia de la convivencia social²⁸.

Bibliografía consultada

- 1 Grisolia, Julio Armando. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tomo I y II, LexisNexis, Argentina, Abril de 2007.
- 2 Rodríguez Mancini, Jorge. Curso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Astrea, Buenos Aires, 1999.
- 3 Vázquez Vialard, Antonio y otros. Tratado del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Astrea, 1984.
- 4 Massa, Sergio Tomás y Fernández Pastor, Miguel A. De la exclusión a la inclusión social. Reformas de la reforma de la seguridad social. Telam Prometeo Libros. 2007.
- 5 Prado, Pedro E. Leyes y Decretos de Trabajo y Previsión. Librería y Editorial Alsina. Buenos Aires- 1949

²⁸ Inspirado en la “Declaración de los Derechos del Trabajador” formulada ante el Honorable Congreso de la Nación por el entonces Presidente de la Nación General Juan Domingo Perón, como base de toda iniciativa de gobierno (Decreto Núm. 4865 del 25 de febrero de 1947).

Conclusion

Reform introduced by Law No. 26.222 allows the incorporation of Argentinean positive law to an initiative that was created by the national government itself, inspired on the respect of rights and guarantees of the human being as a worker, including family groups, as stated by the National Constitution of the Argentinean Republic (art. 14 bis) and in the Treaties and Conventions on Human Rights incorporated into it with constitutional hierarchy with the purpose of widening coverage in cases of disability, suspension or loss of ability for work, with improved access and amount of security benefits, specially the ones from the State level, in search of consolidating spiritual and moral principles inspired in inter-generational solidarity in the bases of social life²⁸.

References

- 1 Grisolia, Julio Armando – Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social – Tomo I y II – LexisNexis Argentina SA – Buenos Aires – Abril de 2007.
- 2 Rodríguez Mancini, Jorge – Curso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social – Astrea – Buenos Aires – Año 1999.
- 3 Vázquez Vialard, Antonio y otros. - Tratado del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social – Astrea – Año 1984.
- 4 Massa, Sergio Tomás y Fernández Pastor, Miguel A. - De la exclusión a la inclusión social. Reformas de la reforma de la seguridad social. Telam Prometeo Libros. 2007.
- 5 Prado, Pedro E. - Leyes y Decretos de Trabajo y Previsión. Librería y Editorial Alsina. Buenos Aires- 1949

²⁸ Inspired in the “Declaration of Workers Rights”, inspired in the “Declaración de los Derechos del Trabajador”, presented before Congress by President Juan Domingo Peron as the basis for all governmental initiatives (Decree 4865, February 25 1947).